



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 41894/2022/CA1

En la ciudad de Mendoza, a los del mes de del año dos mil veintitrés, reunidos en acuerdo los miembros de la Sala "B" de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, y el doctor Juan Ignacio Pérez Curci, encontrándose de licencia el doctor Manuel Alberto Pizarro, procedieron a resolver en definitiva estos autos N° **FMZ 41894/2022/CA1**, caratulados: **"SIDERSA S.A. c/ AFIP- DGI s/ Amparo Ley 16.986"**, venidos del Juzgado Federal de San Luis, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 08/06/2023, contra la resolución del 07/06/2023 por la que se resuelve: "Haciendo lugar a la acción de amparo deducida por la actora Sidersa S.A. contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI), y, en consecuencia, declarando que corresponde ajustar por inflación el diferimiento de 1/6 del ajuste por inflación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal finalizado en fecha 31/8/2022, permitiendo que la actora pueda ajustar por inflación el diferimiento de 1/6 autorizado por la Ley 27.541 cuya aplicación del ajuste por inflación corresponde a los períodos fiscales 2020 (cuota 3) y 2021 (cuota 2). II-) Imponiendo las costas del proceso a la accionada objetivamente perdedora (Art.14 Ley 16.986, Art.68 y concordantes CPCCN). III-) Difiriendo la regulación de honorarios. Protocolícese y notifíquese".

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4° y 15° del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: Vocalías N° 2, 1 y 3.



Sobre la única cuestión propuesta el Sr. Juez doctor Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, dijo:

1) La presente causa tiene su origen con la acción de amparo incoada por Sidersa SA tendiente a que se declare que corresponde ajustar por inflación la tercera cuota del ajuste por inflación del período fiscal finalizado el 31-08-2020 y la segunda cuota del periodo finalizado el 31-08-2021 en virtud del diferimiento de dicho ajuste en seis cuotas anuales dispuesto por la ley 27541. Ello así, debido a que, según la legislación aplicable, las cuotas del ajuste por inflación diferido deben aplicarse a valor nominal, sin ajuste por inflación; cuando en el periodo 2020 y 2021 (Agosto/2020 a Agosto 2021 y Agosto 2021 a Agosto 2022) la inflación según el IPC del INDEC fue del 170,27588 % y del 78,49306 %, respectivamente.

El juez hizo lugar a la demanda en los términos arriba transcriptos y contra su sentencia se alzó la demandada mediante recurso de apelación debidamente fundado.

2) En primer lugar, la demandada se queja de la admisión formal de la vía de amparo. Dice que la actora contaba con los recursos en sede administrativa y la acción contenciosa administrativa del art. 23 inc. a) de la ley 19549; por lo que es improcedente ejercitar directamente el amparo como se hizo.

Además, alega que la acción es extemporánea porque no existe un acto administrativo desde el cual contar el plazo de 15 días hábiles para incoar la acción de amparo.

Por otra parte, critica la cita del precedente jurisprudencial que hizo el juez de grado para justificar la admisión de la vía. En tal sentido, aduce que el magistrado no explicó la aplicación analógica del caso “Conindar San Luis c/ DGI p/ Amparo” (autos N° 62980C5045) y que, de hecho, no son análogos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 41894/2022/CA1

Asimismo, esgrime que el magistrado intentó fundar su criterio en la documental aportada por la actora, la cual no puede ser valorada porque no es oponible a su parte. En ese sentido, puntualiza que la certificación del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de San Luis no da fe del contenido del documento sino sólo de la firma del profesional actuante.

Como segundo agravio, cuestiona la procedencia sustancial del amparo. En ese orden de ideas, en primer término critica que el juez haya desconocido la doctrina del caso "Candy", siendo aplicable el criterio del caso "Santiago Dugan Trocello SRL".

En tal sentido, puntualiza que la pericia, lejos de dar la razón a la actora, la da a su parte. Ello así, toda vez que considera que ninguno de los puntos periciales respondidos por la contadora María del Rosario Pavón tiende a acreditar la confiscatoriedad alegada por Sidersa SA.

Dice que por el contrario, la pericia se informa que la diferencia de impuesto en litigio es de \$55.053,25; sin embargo, no se calcula la alícuota efectiva, es decir, la alícuota del impuesto que terminará pagando el actor si no se hace lugar a su planteo. Entiende que es así porque esa alícuota efectiva queda muy lejos de los parámetros de Candy, y muy cerca de la alícuota real del impuesto (35%).

Arguye que en todos los casos los porcentajes informados por la perito son menores a 0,5%, lo cual indica que el daño patrimonial al que refiere la actora es ínfimo.

Desde este punto de vista, la recurrente argumenta que el juez tomó en forma parcializada la pericia, ya que exponer la diferencia entre el impuesto a ingresar habiendo computado la totalidad del ajuste por inflación o habiendo diferido una porción, no demuestra la confiscatoriedad.

Según la apelante, en esta línea se pronunció la Corte Federal en el caso "Sociedad Rural Río V", del 04/08/2016, donde consideró aplicable el precedente "Santiago Dugan Trocello SRL" por considerar que el peritaje



contable no aportaba elementos suficientes para tener por acreditado un supuesto de confiscatoriedad. También cita un precedente del Juzgado Federal de Bahía Blanca y otro del Juzgado Contencioso Administrativo Federal.

La demandada agregó que, si se hace lugar al amparo, se incurrirá en una violación al principio de división de poderes por intromisión del Poder Judicial en la órbita propia del Poder Legislativo.

A continuación, hace mención de jurisprudencia actual de la Corte: “Feler, Eduardo, Jorge”, expediente N 1818/2003 y “Pontoni, Roberto Luis y otro S.H.”, los que considera aplicables al caso.

Finalmente, plantea caso federal.

3) Corrido el traslado de la apelación, fue contestado por la actora el 13 de junio de 2023.

Respecto a la crítica referida a la improcedencia de la vía del amparo considera que ésta procede, aun existiendo otros remedios legales ordinarios, cuando éstos no reporten la seguridad que los derechos necesitan.

Considera que la diferencia entre el valor nominal y el valor real por el ajuste por inflación, es cuantiosamente superlativa y cualitativamente injusta, confiscatoria y abusiva, tal como lo ha resuelto el juez de grado. De allí que la vía idónea y procedente para el planteo sea la acción de amparo y ninguna otra, porque todas las demás vías no lograrían en el plazo para la presentación de la DDJJ de mi mandante, poder satisfacer el derecho de su parte.

En cuanto a la extemporaneidad del planteo, afirma que el plazo de 15 días no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente.

En lo atinente a la ausencia de confiscatoriedad, aduce que es de un cinismo inconcebible que el Estado reconozca la inflación para el ejercicio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 41894/2022/CA1

fiscal, pero no para las cuotas que son trasladadas al ejercicio siguiente, lo que implica reconocer un derecho, pero limitar o impedir su ejercicio.

En otras palabras, indica que existe el reconocimiento de un derecho, pero en forma “pírrica”, dado que se autoriza a ajustar la inflación pero tomando 1/6 por año, pero al año siguiente si vuelve a producirse inflación, se niega la realidad económica, manteniendo la nominalidad del valor trasladado de a 1/6 sin reconocer el efecto inflacionario.

Mantiene reserva del caso federal.

4) Ingresando al examen de la apelación, adelanto que la considero procedente conforme a los siguientes fundamentos.

En primer lugar, advierto que la cuestión ventilada guarda sustancial analogía con los autos N° FMZ 18135/2021/CA1, caratulados "SIDERSA S.A. c/ AFIP-DGI s/ Amparo ley 16.986", en la cual, en fecha 07 de julio de 2.023, esta Cámara, con voto preopinante del Dr. Pizarro, se pronunció por el rechazo de la demanda.

Lo cierto es, que la actora pretende que se ajuste por inflación la tercera cuota del diferimiento del periodo fiscal 2020 y la segunda cuota del diferimiento del periodo fiscal 2021, ya que afirma que el índice del INDEC determina un coeficiente de actualización del 170% y 78 % respectivamente, siendo que en ambos casos permiten aplicar el mecanismo de ajuste para cada periodo pero no a las anualidades del pago diferido lo que conlleva una clara injusticia, confiscatoriedad y afectación de la capacidad contributiva de su mandante.

Sin embargo, es imperioso resaltar que la no actualización de la cuota encuentra sustento en leyes emanadas del Congreso (ley 24073, art. 39, y ley 25561, art. 4) que prohíben el ajuste por desvalorización monetaria, sin perjuicio de las excepciones admitidas legalmente, dentro de las cuales no se encuentra el asunto objeto de esta litis.



Tal como entendió el Máximo Tribunal en el precedente "Candy SA": en los autos "Santiago Dugan Trocello S.R.L." (Fallos: 328:2567), al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador General de la Nación, expresó que tanto el art. 39 de la ley 24.073 como el art. 4° de la ley 25.561 que sustituyó el texto de los arts. 7° y 10 de su similar 23.928 representan una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75, inc. 11, de la Constitución.”

Seguidamente expuso: “Con sustento en dicha norma y de conformidad con lo resuelto en otros precedentes (Fallos: 315:158 y 992), en aquella oportunidad se recordó que resultaba indudable la competencia del legislador nacional para dictar la ley 23.928 y que, a partir de este acto, no sólo habían, quedado derogadas las disposiciones legales sino que, además, debían ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que el ajuste por depreciación de la moneda, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación. Por ello, se agregó que la prohibición al reajuste de valores, así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, tal como ordenan los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es éste quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).”

También, añadió que: “el alegado incremento de la carga tributaria que traería aparejada la prohibición de emplear el mecanismo de ajuste del título VI de la ley del impuesto a las ganancias ha sido establecido por el Congreso Nacional, que es el único poder del Estado investido de la atribución para el establecimiento de tributos (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912; 316:2329; 319:3400, entre muchos otros), destacándose, al respecto, que las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 41894/2022/CA1

leyes 24.073 y 25.561 habían cumplido con el requisito del art. 52 de la Constitución Nacional en cuanto al mecanismo específico de sanción de toda ley tributaria.”

Es cierto que la Corte, en ese mismo precedente, consideró que no deben aplicarse las normas que prohíben el ajuste de valores cuando su produce un supuesto de confiscatoriedad, al decir: “...en reiteradas oportunidades esta Corte ha señalado que el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo e ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarla: (Fallos: 235:883).”

Y aclaró cuándo se menoscaba con exceso el derecho de propiedad, por verificarse un supuesto de confiscatoriedad, considerando que : “debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322.3255, entre muchos otros).”, precisando luego: “En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082) 1300, 239.157; 314:1293; 322.3255, entre otros).”

A la luz de estos conceptos, en el caso de marras asiste razón a la AFIP en que ni la actora, ni la pericia, ni la sentencia demostraron que el incremento de la carga tributaria producido por la no actualización de la tercera cuota del periodo fiscal 2020 y la segunda cuota del periodo fiscal 2021 convierta al tributo en confiscatorio.

En efecto, para demostrar que se verificaban los extremos sentados por el Alto Tribunal en "Candy SA", debería haber probado cuál es la ganancia imponible de los períodos 2020 y 2021 (los que van desde agosto 2020 a



agosto 2021 y de agosto 2021 a agosto 2022) y que el impuesto, computando la cuota a valor nominal, absorbe una parte sustancial de aquella.

No obstante ello, advierto que no se encuentra acreditado – y ni siquiera explicitado- cuál ha sido la ganancia imponible de los períodos 2020 - 2021; motivo por el cual resulta imposible analizar si las normas que prohíben la indexación de la cuota producen resultados confiscatorios.

Obsérvese que toda la argumentación de la actora, que fue la adoptada por el juez para fundar su sentencia, tiende a afirmar que es irrazonable que las ganancias y pérdidas de los períodos 2020 y 2021 se ajusten por inflación y que la tercera cuota del periodo fiscal 2020 y la segunda cuota del periodo fiscal 2021, no se actualice.

No obstante, como se dijo precedentemente, ello es producto de leyes del Congreso que prohíben el reajuste de valores para el caso puntual de la cuota del ajuste y esas leyes son constitucionales mientras no se pruebe una violación al derecho de propiedad, lo cual no ha ocurrido en el caso.

Insisto en que el solo hecho de que la actora no explicitó y ni siquiera proyectó estimativamente las ganancias imponibles del periodo 2020 y 2021 impide realizar el examen de confiscatoriedad.

5) Que, a lo anteriormente expuesto, se une que la presente causa tramita por la vía expedita de amparo; la cual requiere, como recaudo de procedencia sustancial, que se verifique una lesión manifiestamente ilegal o arbitraria de los derechos constitucionales (cfr. art. 1 de la Ley de Amparo).

Este es un elemento más en contra de la procedencia de la acción ya que, si no existen elementos probatorios para sostener la existencia de un caso de confiscatoriedad, menos aún para acreditar que éste sea manifiesto.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B
FMZ 41894/2022/CA1

6) Que lo argumentado es suficiente para acoger la apelación, revocar la sentencia y rechazar la demanda, sin que sea necesario adentrarme en el examen de los restantes agravios.

Cabe recordar que "no es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por el recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la solución del litigio" (conf. Fallos 312:1500; 308:2263; 234:250; 294:427; 322:270; 316:2908; 316:50; 315:1185; 311:1191).

7) Teniendo en cuenta lo normado por el art.279 del CPCCN corresponde imponer las costas de ambas instancias a cargo de la actora perdedora en virtud del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 279 del CPCCN, aplicable en virtud del art. 17 y art. 14 de la ley 16.986).

8) En lo atinente a los honorarios de los profesionales intervinientes en esta segunda instancia, considero pertinente, por razones de conveniencia y a los fines de guardar celeridad en el proceso, fijar los emolumentos profesionales en un 35% de lo que regule oportunamente el juez para la primera instancia. Proceda éste a determinar la suma, en moneda de curso legal y en UMA, cuando existiere base cierta (arts. 30 y 51 de la Ley 27.423).

Por las razones expuestas, voto por la negativa a la única cuestión propuesta.

Es mi voto.

Sobre la única cuestión propuesta, el señor juez de cámara Dr. Manuel A. Pizarro, dijo:

Que, adhiero al voto de mi distinguido colega de Sala, sin embargo en lo que respecta a la regulación de honorarios de la presente instancia estimo



que corresponde diferirlos al momento oportuno. Ello así, porque la ley arancelaria aplicable a ellos es la N° 27.423 debido a la fecha de interposición del recurso y ésta establece bajo pena de nulidad su determinación en pesos y UMA (cfr. art. 51), lo cual recién será posible una vez determinados los honorarios de primera instancia.

Sobre la única cuestión propuesta, el señor juez de cámara Dr. Juan Ignacio Pérez Curci, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

En mérito a la votación que instruye el acuerdo precedente, por mayoría, **SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto en fecha 08/06/2023 y en consecuencia revocar la sentencia del día 07/06/2023. **2) RECHAZAR** la demanda deducida por Sidersa SA contra la AFIP. **3) IMPONER** las costas de ambas instancias a la actora perdedora (cfr. art. 279 del CPCCN, aplicable en virtud del art. 17 y art. 14 de la ley 16986). **4) DIFERIR** la regulación de honorarios para cuando estén determinados los de primera instancia.

Notifíquese, protocolícese y publíquese.

